

Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ordenó dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandado contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que acogió el de nulidad que presentó la demandante y en la de reemplazo accedió a la demanda de indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante y daño moral por accidente del trabajo.

Segundo: Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo, contra la resolución que falle el recurso de nulidad puede deducirse el de unificación cuando *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*. Asimismo, del tenor de lo dispuesto en su artículo 483-A, esta Corte declarará inadmisibile el recurso si faltan los requisitos de sus incisos primero y segundo, entre otros, fundar el escrito e incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia y el de acompañar copia de las sentencias respectivas.

Tercero: Que la materia de derecho que se propone unificar consiste en determinar “el recto sentido y alcance que debe otorgarse al artículo 184 del Código del Trabajo. En este sentido, la interpretación debe estar dada por el cumplimiento de las medidas de seguridad legalmente exigibles para la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.”

Cuarto: Que para acoger el recurso de nulidad interpuesto por la demandante, fundado en la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a lo dispuesto en su artículo 184 del Código del Trabajo, se tuvo en consideración que en la instancia se establecieron como hechos inamovibles que:

1.- Entre don Rubén Alejandro Gallardo Leyton y Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente, con fecha 14 de junio de 2018, se celebró un contrato de trabajo en virtud del cual el primero se desempeñaría como mecánico.

2.- El 23 de octubre de 2018, mientras el trabajador revisaba el camión patente ZK-4531 que tenía acoplada la batea patente JF-2600, reventó un



amortiguador de los ejes de las ruedas, ocasionándole lesiones diagnosticadas como contusión leve de hombro derecho; cuerpo extraño ocular conjuntival bilateral; contusión craneal; conjuntivitis; baro trauma acústico; trastorno de adaptación y trastorno de estrés agudo.

3.- La Comisión Evaluadora por Accidentes del Trabajo, mediante Resolución N° 20200384 de 28 de febrero de 2020, calificó al actor con un 35% de incapacidad laboral permanente, con secuelas de disminución de agudeza visual, cefalea post tec, e hipoacusia mayor derecha.

4.- El empleador entregó al trabajador el documento llamado procedimiento de trabajo seguro, y éste asistió a una charla de seguridad realizada por el prevencionista de riesgos de la empresa.

5.- El empleador entregó al actor elementos de seguridad personal.

6.- Al momento del accidente el administrador de planta, don Héctor Guzmán Magaña, se encontraba con permiso, siendo avisado del siniestro por la secretaria.

7.- El demandante no cumplió lo dispuesto en el documento procedimiento de trabajo seguro, ni portaba anteojos de seguridad.

Luego, el tribunal de nulidad determinó que las medidas adoptadas por la demandada Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente, consistentes en haber entregado el documento procedimiento de trabajo seguro, impartido una charla de capacitación y proporcionar algunos elementos de seguridad personal, no resultaron ser suficientes para asegurar eficazmente la integridad física de don Rubén Alejandro Gallardo Leyton, en razón de que el 23 de octubre de 2018 omitió controlar que el empleado utilizara dichos implementos y que pudiera efectivamente cumplir el procedimiento de trabajo seguro, puesto que ese día el administrador de planta y jefe directo del demandante se encontraba ausente, con permiso, sin que conste la designación de otra persona en su reemplazo, nombramiento que no solo era necesario para el cumplimiento del deber de cuidado que le asistía, sino que resultaba obligatorio al tenor del documento procedimiento de trabajo seguro, conforme al cual el trabajador que detecte condiciones de riesgo deberá informar de ello a su jefe directo, cosa que el señor Gallardo se vio impedido de hacer por un hecho o causa imputable al empleador. Así las cosas, pura y simplemente cabe concluir que la Sociedad Inversiones y Áridos San Vicente Limitada infringió el deber de seguridad a que se encontraba



obligada, por el hecho de no haber respetado las normas que se dictó para asegurar la salud e integridad física de sus trabajadores.

En consideración a lo anterior, se acogió la nulidad impetrada y en sentencia de reemplazo se accedió a la demanda indemnizatoria de perjuicios por concepto de daño moral y lucro cesante

Quinto: Que para sostener el recurso de unificación, el demandado acompañó, a modo de contraste, tres sentencias.

La primera dictada por esta Corte en la causa Rol N°4.994-2019, de 20 de abril de 2020, en la cual se concluye que la norma del artículo 184 del Código del Trabajo impone un alto estándar de cuidado para el empleador, ya que le obliga a proteger “eficazmente” la vida y la salud de los trabajadores, lo que significa tomar medidas que tengan la capacidad de lograr el efecto buscado o esperado. En ese contexto, se ha entendido que frente a un accidente del trabajo será el empleador quien tendrá la carga de demostrar que adoptó todas las medidas que –atendido el tipo de trabajo y demás circunstancias del caso– se preveían como necesarias para tal fin.

Concluye que, en este caso, las “medidas necesarias” que debe tomar el empleador dependerán de la situación concreta de los servicios que presta el trabajador y de los riesgos a que está expuesto con su labor – lo que bien puede significar la adopción de medidas que no constituyen obligaciones legales o administrativas–; sin embargo, en este caso específico, no puede entenderse que la referida obligación comprende la adopción de una medida que la autoridad o la ley se ha limitado simplemente a sugerir o recomendar, en particular la instalación de cabinas de seguridad, ya que debe presumirse que no reúne las condiciones que la hagan indispensable para la prevención de accidentes o bien presenta dificultades de otra índole que no aconsejan imponerla obligatoriamente, como parece plantearse en alguno de los antecedentes que constan en autos, máxime si tampoco se observa la relación causa efecto que podría haber existido en el evento que hubiera contado el bus con dichas medidas.

En las siguientes causas Rol N°1036-2013, de fecha 8 de noviembre de 2013, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y Rol N°339-2017, de 17 de abril de 2017, de la de Talca, se concluye que si el accidente sufrido por el trabajador se produce por un tercero ajeno a la demandada o por factores extraños a la acción de aquella,, habiendo tomada ésta todas las medidas de resguardo, no cabe imputarle responsabilidad al empleador.



Sexto: Que, en las condiciones expuestas, fluye la decisión de declarar inadmisibile el recurso de unificación intentado, ya que las sentencias de contraste no inciden en la materia de derecho descrita, referida el cumplimiento de las medidas de seguridad legalmente exigibles al empleador; constatándose que, en las acompañadas, la decisión estuvo referida a la ausencia de responsabilidad de aquél cuando el accidente se produce no obstante haber adoptado todas las providencias requeridas, por causas ajenas a su voluntad; advirtiéndose la imposibilidad de efectuar la comparación requerida para la proponibilidad de este arbitrio excepcional y de estricto derecho, por cuanto en la recurrida se establece que el demandado no cumplió con su procedimiento de trabajo seguro, lo que derivó en el accidente del actor, por lo que corresponde declarar improcedente el intentado.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisibile** el recurso interpuesto por el demandado contra la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintiuno.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°80.141-2021.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., ministro suplente señor Roberto Contreras O., y los Abogados Integrantes señor Gonzalo Ruz L., y señora Leonor Etcheberry C. No firma el abogado integrante señor Ruz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno.



En Santiago, a dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

